

MEMORIA SOBRE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “PROGRAMA DE RESPIRO PARA FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y GRAVES TRASTORNOS DE CONDUCTA”.

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), al considerarse este contrato de servicios, se procede a justificar el recurso a la gestión indirecta para su prestación.

El recurso a la gestión indirecta presupone una decisión previa en este sentido por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, adoptada conforme a criterios de racionalidad.

La Consejería de Familia Juventud y Asuntos Sociales, consciente de la necesidad de que las personas adultas con discapacidad intelectual y con graves trastornos de conducta precisan de un apoyo extenso y generalizado con cuidados y atenciones especializadas, y dentro del marco de sus competencias y de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, promueve acciones encaminadas a establecer medidas relativas a la atención social especializada a personas con discapacidad, procurando, de una parte, la integración en su entorno familiar y comunitario y la atención especializada y, de otra, programas de respiro a sus cuidadores que permitan la conciliación de su vida personal y familiar. Además la atención prestada en centros de día para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta tienen un horario limitado en horario diurno laborable no prestando servicio en los días festivos y fines de semana.

De conformidad con lo anterior, el objeto de este contrato es ofrecer un servicio de respiro para familias cuidadoras de personas adultas en situación de dependencia reconocida, con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta en la Comunidad de Madrid. En particular, el pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato define el proyecto como un servicio de apoyo de carácter no permanente dirigido a familias cuidadoras de personas adultas mayores de 18 en situación de dependencia reconocida, con discapacidad intelectual y necesidades extensas de apoyo asociadas a graves trastornos de conducta, al objeto de favorecer la conciliación de su vida familiar, laboral y social a través una serie de apoyos y actividades inclusivas de ocio y tiempo libre dirigidas a su familiar con discapacidad proporcionados por personal especializado.

De acuerdo con lo expuesto en la memoria justificativa de la necesidad del contrato, así como en la propia descripción de las actuaciones e intervención a desarrollar en el Pliego de Prescripciones Técnicas, las prestaciones propias del presente contrato se consideran de carácter especializado, no ordinario de la Administración, que deben ser prestadas por personal cualificado y con experiencia constatada para tal fin, garantizando la continuidad el servicio, dando así cobertura a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual

con graves trastornos de conducta y sus familia, al objeto de dar cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no dispone de los medios propios necesarios, ya sean los medios materiales como las infraestructuras y edificios e instalaciones de los centros, ya sean medios personales de profesionales para llegar a ofrecer atención a total de 110 personas usuarias y sus familias a lo largo de este nuevo contrato y así atender la demanda existente de este tipo de recurso. En particular, en lo que a los medios personales se refiere, el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato establece unos medios personales, que ni por su número, ni por su variedad y especialización se puede considerar que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales está en condiciones de aportarlos, entre otros director/a del servicio, psicólogo/a, trabajador/a social, educador/a social, técnicos en integración social (TIS), cuidadores/técnicos en atención sociosanitaria.

Además, entre las funciones atribuidas a esta Dirección General no se encuentra la gestión directa de los servicios de atención social, gestión directa atribuida a la Agencia Madrileña de Atención Social, por el Decreto 230/2015, de 20 de octubre.

De acuerdo con el artículo 1.1 del Decreto 230/2015, de 20 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Madrileña de Atención Social, ésta ejerce la gestión directa, el desarrollo y el control de los centros y Servicios de Asistencia Social que, siendo de titularidad de la Comunidad de Madrid, le han sido asignados de conformidad con la normativa aplicable, así como de los que se le asignen en el futuro.

Si bien, este servicio podría haber sido asumido directamente por la Administración, a través de la Agencia Madrileña de Atención Social, sin tener que recurrir a la iniciativa privada en este campo, de atención a personas con discapacidad, se han dado las siguientes circunstancias para desistir de la gestión pública del centro:

— Por un lado, las restricciones a la contratación laboral de la Agencia Madrileña de Atención Social impuestas por las sucesivas leyes presupuestarias.

— La plantilla actual de la Subdirección General de Atención a Personas con Discapacidad y Enfermedad Mental que, dentro de la Dirección General, ejerce la gestión de la red especializada de Atención a Personas con Discapacidad cuenta aproximadamente con 35 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral), que tienen asignadas unas determinadas tareas y horarios, que impiden compaginarse con la prestación de este servicio.

— En esta Subdirección General, el personal de estructura es de Administración General y el especializado son empleados públicos de diferentes categorías que se encargan de hacer el seguimiento de los recursos de gestión indirecta, no existiendo en la Relación de Puestos de Trabajo ciertos perfiles que son claves para centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

— Por otro lado, limitaciones de corte económico, ya que el coste de un centro público normalmente es mayor y también la Administración tiene que enfrentarse directamente con la conflictividad laboral.

— Al mismo tiempo el Programa Presupuestario 231F “Atención a personas con discapacidad” tampoco dispone de los créditos necesarios para acometer el incremento de plantillas que la gestión de cada uno de los centros requeriría ni el de otros gastos que se

deberían asumir, resultando imposible el incremento presupuestario que ello requeriría.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta, por tanto, la normativa vigente y la necesidad de dar continuidad para prestar el servicio a personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta asociado y sus familias, dado que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad no puede prestar con sus propios medios este servicio, se hace necesario ofrecer una solución ágil y duradera, recurriendo a una contratación exterior para su ejecución por entidades que desarrollen su actividad en el ámbito del objeto de este contrato, dando así cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.

En consecuencia, se procede a elaborar la siguiente propuesta del contrato del servicio denominado *“Programa de Respiro para Familias Cuidadoras de Personas Adultas con Discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta”* conforme a lo establecido en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho contrato tendrá una duración de dos años (24 meses) prorrogable como máximo de 24 meses adicionales en uno o varios periodos, estando previsto que los contratos inicien su ejecución 1 de enero de 2026.

Madrid, (fecha de la firma)

LA DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Firmado digitalmente por: SERRANO FERNÁNDEZ ALEJANDRA
Fecha: 2025.03.19 17:28